**El MERCOSUR en la Agenda Global del Desarrollo: El PEAS y su vigencia en el marco de los ODS 2030**

**Introducción**

Este ensayo busca reposicionar el papel de las instituciones del MERCOSUR dentro de la Agenda Global del Desarrollo. En los últimos años, el bloque regional ha avanzado en su proceso de democratización interno, así como en la construcción de una agenda multidimensional, multinivel y multiactor del desarrollo. MERCOSUR cuenta con instituciones e instrumentos operativos para promover acciones coordinadas que permitan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) y así mejorar la vida de su ciudadanía.

La sección siguiente repasa algunos de los conceptos fundamentales dentro de la agenda global del desarrollo. Las diversas iniciativas para promover el desarrollo a través de la cooperación entre los países, y algunos problemas que se plantean para los países de ingresos medios y medio altos. La segunda sección presenta la estructura institucional del MERCOSUR y los instrumentos que éste ofrece para promover regionalmente la agenda global del desarrollo. Se hace especial atención en el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) del MERCOSUR como instrumento de coordinación de los diversos ámbitos que conforman la Dimensión Social del bloque.

Las secciones tercera y cuarta repasan las principales agendas de promoción del desarrollo global y regional, identificando las principales coincidencias de éstas con el Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR. En la quinta se reflexiona sobre la importancia de la colaboración intersectorial en el marco de los procesos de integración regional y al abordar la agenda del desarrollo.

Finalmente, se extraen algunas conclusiones poniendo en relevancia el papel que tiene el PEAS como un instrumento coordinador de la Dimensión Social en el MERCOSUR y su potencialidad en cuanto mecanismo para la convergencia de la agenda social regional con los ODS 2030.

**1.- Desafíos globales y respuestas regionales**

El fenómeno de la globalización exige de los países la construcción de respuestas consensuadas frente a problemas que trascienden sus fronteras nacionales. El cambio climático, la inestabilidad financiera y el insuficiente crecimiento económico, la desigualdad social que parece no dar tregua, la movilidad migratoria en busca de mejores oportunidades de vida, son todos factores que impactan en la convivencia de personas y naciones[[1]](#footnote-1) y obligan a la generación de nuevos esquemas de gobernanza que puedan sintetizar estrategias cooperativas multinivel y multiactor. Como nuevo modo de gobernar, “la gobernanza destaca la naturaleza de la colaboración de los actores de la sociedad para encaminar mejor la atención de los problemas públicos, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del espacio de lo público” (Aguilar Villanueva, 2006: 119). En tal sentido, la gobernanza regional es una práctica de conducción que involucra la presencia de múltiples actores estatales, sectoriales y sociales, que en su accionar superan las esferas de los Estados nacionales.

De cara a estos problemas, surgen diversas iniciativas, que buscan dar respuesta en el marco de una agenda global del desarrollo. Dentro de los más importantes, se destaca la iniciativa promovida por el Sistema de Naciones Unidas, referida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)[[2]](#footnote-2). Además de los ODS, existen otros importantes instrumentos de promoción del desarrollo regional y global[[3]](#footnote-3), que tienen un punto crítico en común: la relativa debilidad de los mecanismos para brindar seguimiento y apoyo técnico a la efectiva implementación de esos planes.

Frente a esa debilidad de los mecanismos de *enforcement* de la agenda del desarrollo, diversos autores reivindican la importancia, frente a la existencia de unas pocas organizaciones globales especializadas, de construir una “red densa” de instituciones mundiales, regionales y nacionales. Esta red densa sería la forma más apropiada para promover la cooperación global, favoreciendo la interacción entre los ámbitos globales, regionales, subregionales y nacionales en las diversas dimensiones del desarrollo. (Ocampo, 2015; Bárcena, 2015).

Según Bárcena (2015), los ámbitos regionales y subregionales son los más idóneos para promover la inclusión y protección de los intereses de los actores más débiles. Para Bárcena, es necesario promover la “descolonización” del proceso de cooperación global, para desarrollar relaciones más eficaces y respetuosas entre las instancias globales y los espacios nacionales responsables de implementar la agenda del desarrollo. La participación de los países que comparten ciertas características, en espacios subregionales, es una forma de potenciar la voz de actores de menor dimensión relativa y de propender a establecer relaciones de poder más equilibradas. Así es que, en contextos de fuerte interdependencia, se impone el concepto de “soberanía inteligente”, el cual busca destacar las ventajas de hacer un uso adecuado de la cooperación internacional. La cooperación internacional no debería en ningún caso afectar la autonomía decisoria de los países receptores, sino que debe funcionar como un factor que permita reforzar la eficacia de las acciones de los Estados soberanos en sus respectivos territorios (Kaul y Blondlin, 2015).

Entonces, la integración regional aparece como una estrategia apropiada para países de menor desarrollo relativo. Pero también resulta adecuada para aquellos de renta media alta, que afrontan el problema del “desarrollo en transición”. Potenciar enfoques colectivos, entre actores regionales, para la captación de recurso técnicos y financieros de la cooperación internacional aparece como una estrategia óptima y oportuna para la disminución de las asimetrías al interior de los Estados, de los bloques regionales y globales. En particular, es una oportunidad para fortalecer las estrategias de cooperación triangular, en donde los procesos de transferencia de conocimientos y tecnologías se ven facilitados por la presencia de socios con niveles de desarrollo similares (CEPAL, 2018)[[4]](#footnote-4). “La diversidad de conceptualizaciones sobre la cooperación triangular es una de sus principales fortalezas, pero también uno de los principales retos que enfrenta este esquema de cooperación. Como fortaleza, esta falta de rigidez conceptual le permite adoptar diferentes modalidades, generando mecanismos de acción más efectivos y eficientes en determinados contextos. Como reto, todavía genera ciertos desafíos en la documentación y sistematización de información sobre cifras que permitan medir y mapear, de manera homologada, estas acciones” (Oddone y Rodríguez Vázquez, 2016: 181).

Debemos tener presente que América Latina enfrenta una pérdida de su importancia relativa como receptora de cooperación tradicional. La mayoría de las naciones de la región comienzan a ser consideradas países de renta media (PRM) y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se dirige mayormente hacia regiones como África subsahariana y Asia. La comunidad internacional entiende a los PRM como un todo homogéneo, como si tuviesen el mismo nivel de desarrollo a lo largo y a lo ancho de todo su territorio, dando por descontado las profundas asimetrías y desigualdades interterritoriales que caracterizan a los países de América Latina y que reproducen “centros” y “periferias” en sus propias estructuras productivas internas. En este sentido, la región requiere de una cooperación diferente para escapar de lo que un autor ha llamado como la “trampa del progreso” (Alonso, 2006). Al mismo tiempo, dada la nueva realidad de los países latinoamericanos por su papel dual de donantes y receptores en la cooperación internacional, éstos han tenido que replantear su rol en el sistema internacional y redefinir su participación dentro del actual esquema de cooperación al desarrollo, dando así mayor impulso a las políticas de cooperación Sur-Sur y triangular.

Entonces, para que los Estados puedan aprovechar estas oportunidades de colaboración, las políticas públicas prevén diversas herramientas que facilitan la actuación coordinada de diferentes instancias que participan del campo de las políticas de desarrollo social. La generación de pactos, convenios, planes y objetivos consensuados, entre otros, son algunos de los instrumentos técnicos a disposición. Como ha sido bien destacado por una extensa bibliografía, esos instrumentos requieren de una institucionalidad apropiada, sobre la cual fundar los procesos de generación de consensos, distribución de tareas en la implementación operativa, financiamiento compartido y rendición de cuentas colectiva (Cunnill-Grau *et al.*, 2015 y Maldonado Valera, 2015).

En síntesis, frente a estos desafíos globales del desarrollo y la reconfiguración de la cooperación en el sistema internacional y en América Latina, es importante reafirmar el valor que tienen experimentos de integración regional como el MERCOSUR. Este espacio de integración de países de renta media cuenta con instituciones e instrumentos técnicos, que pueden ser movilizados para promover acciones y respuestas coordinadas frente a los problemas globales. Resulta fundamental aprovechar y poner en valor estas instituciones regionales, que fueron construidas trabajosamente durante más de veinticinco años de vida del MERCOSUR y que brindar un espacio fundamental para la articulación de estrategias de cooperación Sur-Sur.

**2.- El MERCOSUR como estrategia de desarrollo regional**

En su origen, el MERCOSUR surge como una estrategia para la promoción del desarrollo a partir de un proyecto de integración regional. Mediante la generación de líneas políticas comunes, que establecen un marco de acción para los países socios, se trata de enfrentar ventajosamente las oportunidades y desafíos que ofrece el fenómeno de la globalización. Esas líneas son generadas y sostenidas por una estructura institucional común, que es la que da forma a la gobernanza del bloque (Caetano, 2011).

La gobernanza del MERCOSUR, coronada por el Consejo del Mercado Común (CMC) y el Grupo Mercado Común (GMC), se integra por representantes de los cuatros país en todos los niveles de actuación. De esa estructura se desprenden una serie de reuniones especializadas, de alto nivel político y técnico, responsables de generar orientaciones y asesorar sobre el proceso integrador en sus más diversas dimensiones[[5]](#footnote-5). Ese marco facilitador permite que economías tan disímiles, como las de Argentina y Brasil, Paraguay y Uruguay, procesan sus diferencias y establezcan orientaciones para una agenda común del desarrollo.

El acuerdo regional cuenta con una serie de espacios vinculados a la regulación y desarrollo social del bloque, con reuniones vinculadas a Empleo y Seguridad Social, Educación, Salud y Asistencia Social, por mencionar algunas. Estos diversos ámbitos cuentan con sus planes de trabajo y sus orientaciones específicas, que buscan coadyuvar en el proceso de construcción del espacio político, social y económico común del bloque. Esas orientaciones técnicas son luego adoptadas por los órganos de decisión política superior (dependiendo de la temática, el CMC o GMC), para luego ser internalizadas por cada uno de los Estados Parte.

Frente a la complejidad de la agenda del desarrollo, el MERCOSUR aparece como un espacio institucional privilegiado, con ventajas competitivas a la hora de pensar en procesos de coordinación de las agendas de desarrollo. El MERCOSUR ofrece una armazón institucional, compleja y sofisticada, sobre la cual establecer objetivos compartidos, colaboraciones y enfoques comunes frente a las múltiples agendas del desarrollo global. Por ejemplo, con la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMASM), un ámbito intersectorial que reúne todas las carteras especializadas en los temas amplios de la política social: Asistencia Social, Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, entre los más importantes. De ellos se derivan una variedad de Subgrupos de Trabajo técnicos, responsables del diseño de iniciativas, normativas y regulaciones, vinculadas al proceso de integración regional[[6]](#footnote-6).

Además de este ámbito institucional de coordinación de políticas, la CCMASM, también existe un instrumento específico, como es el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS). El PEAS es una herramienta que permite jerarquizar las acciones de diversas reuniones técnicas, que entienden sobre los aspectos del desarrollo social del bloque. La supervisión de este Plan corresponde al CCMASM, organismo que reúne a los diversos ámbitos vinculados con las políticas de desarrollo social. De esta forma, CCMASM puede funcionar como un espacio institucional ordenador, para priorizar y jerarquizar los temas que conforman la agenda del desarrollo regional. También es un espacio de aprendizajes e intercambios de experiencias y prácticas comprobadas de gestión del desarrollo social.

El PEAS y la CCMASM cuentan con una instancia de apoyo técnico especializado en el Instituto Social del MERCOSUR (ISM), responsable de dar seguimiento a los temas de la Dimensión Social. El ISM fue creado por los estados parte del MERCOSUR en 2007, con el propósito de favorecer el proceso de integración en sus dimensiones sociales. El Instituto viene a enriquecer la mirada sobre los procesos de la integración, buscando superar las miradas reduccionistas, que subsumen este proceso a los aspectos meramente comerciales. Por esta razón, el ISM aporta al proceso de constitución de una ciudadanía común, desde el proceso de diseño e implementación de políticas públicas en la región, contribuyendo a incorporar la visión de los derechos humanos y sociales que ha sido construida por los países del MERCOSUR.

**3.- La agenda global y regional de promoción del desarrollo**

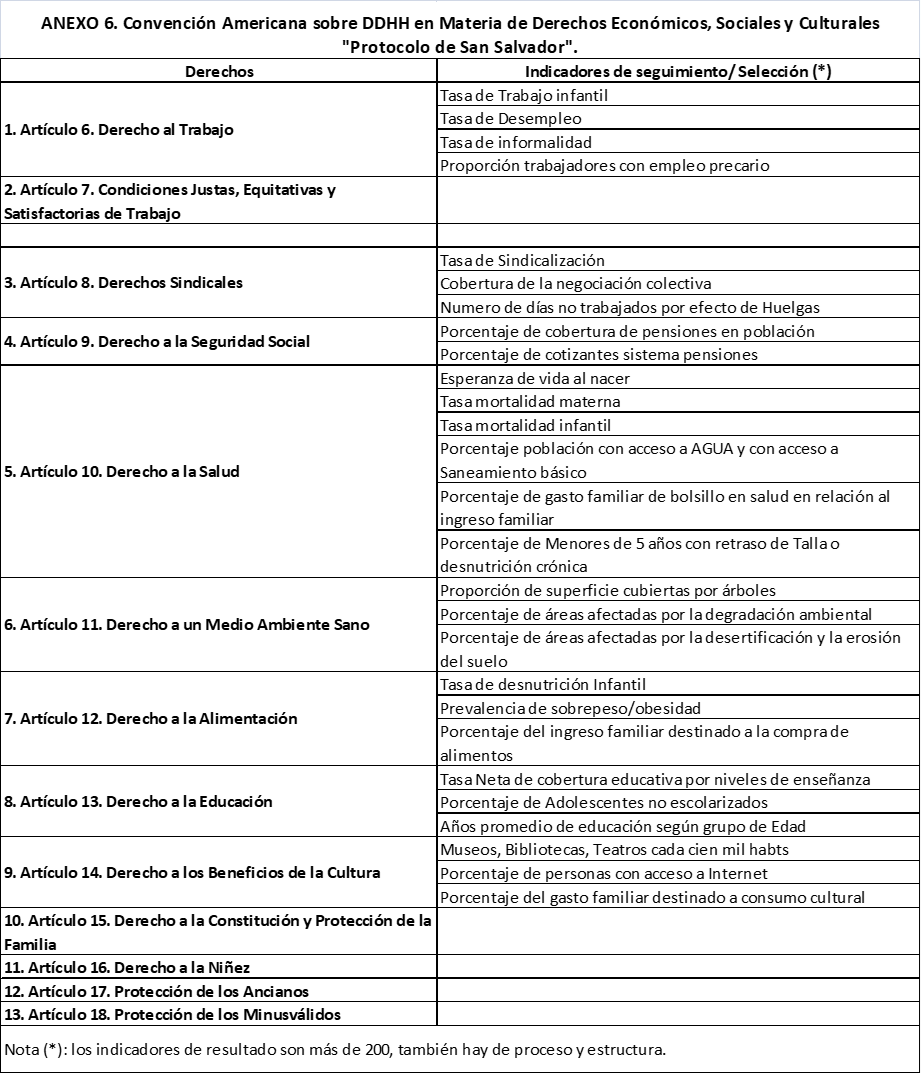
Si examinamos las agendas del desarrollo a nivel global y regional, podemos identificar un importante marco de acuerdos e iniciativas internacionales, direccionados a la promoción del desarrollo de los países y a la promoción y protección de los derechos de las personas. Todos estos instrumentos están inspirados por la necesidad de impulsar procesos de desarrollo armónicos, que beneficien a las regiones, los países y las personas.

Para América Latina, una de las regiones del mundo con los más altos niveles de desigualdad económica y social, estos marcos de políticas constituyen referencias relevantes. Para el MERCOSUR, uno de los espacios más activos de integración política de la región, estos instrumentos son una referencia ineludible.

Dentro del área americana contamos con al menos siete instrumentos clave de orientación en las políticas de desarrollo social. Los principales instrumentos son: i) el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de los Estados Americanos (OEA); ii) el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) del Mercado Común del Sur (MERCOSUR); iii) la Carta Social de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA); iv) la Agenda Social Prioritaria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); v) el Plan de Metas Sudamericanas de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); vi) el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de la Naciones Unidas (ONU). De alcance global y gran impacto en la región, tenemos vii) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU).

Los instrumentos internacionales de derechos sociales fortalecen el diseño y la ejecución de las políticas nacionales, bajo una lógica de realización progresiva, que garantizan el cumplimiento de los derechos consignados, al mismo tiempo que contribuyen a la incorporación de nuevos derechos y beneficiarios y generan nuevas obligaciones para los Estados.

El Protocolo de San Salvador fue aprobado por los países de la OEA en junio de 1999, e instrumenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). En el marco de sus artículos se destacan las garantías sobre el derecho al trabajo, los derechos sindicales y a la seguridad social, a la salud y a la alimentación, a la educación y la cultura, y a un ambiente sano y condiciones dignas para todas las personas. En 2005, OEA establece un mecanismo para el seguimiento del cumplimiento de los DESC mediante informes nacionales periódicos[[7]](#footnote-7). En 2015, se aprueba un Manual de Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos contemplados en el Protocolo. El manual propone una batería de indicadores de progreso en seis áreas de los DESC, diferenciando entre indicadores estructurales, de proceso y resultado. El Manual no establece metas para la región, pero propone 204 indicadores de resultado para seguimiento de los DESC[[8]](#footnote-8).



El Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR, conocido como PEAS, es un instrumento diseñado por los Estados Parte en 2011 con el objetivo de articular y desarrollar acciones específicas, integrales e intersectoriales para consolidar la dimensión social del bloque[[9]](#footnote-9).



También en el ámbito de OEA, la Carta Social de las Américas, aprobada por la Asamblea de septiembre de 2012, establece un marco general para el desarrollo integral en el continente. La Carta considera diversos campos como el económico, social, educativo, cultural y científico tecnológico. Parte de la afirmación que democracia y desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que la promoción y protección de los derechos son consustanciales al desarrollo integral. En 2015 el Consejo Permanente de OEA aprueba el Plan de Acción de la Carta Social de las Américas. El Plan se estructura sobre siete áreas de intervención (dimensiones) que abarcan temas como trabajo, protección social, vivienda, entre otros. Este plan incorpora 54 líneas estratégicas de acción, con orientaciones más precisas de trabajo en materia de desarrollo social integral. Los países son los responsables de implementar estas orientaciones, y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de OEA es el encargado de su seguimiento. El plan carece de metas e indicadores para su evaluación y seguimiento.



La UNASUR igualmente ha definido un marco regional para orientar las políticas de desarrollo en la región. Este marco está definido en primer lugar por la Agenda de Acciones Sociales Prioritarias de UNASUR, aprobada en el año 2012. En segundo término, un desarrollo más reciente es el de las “Metas Sudamericanas para el Desarrollo Social”, que amplía notablemente al marco de trabajo, con una mayor precisión metodológica. La Agenda de Acciones Sociales está definida por las Decisiones de Jefes de Gobierno y Estado de UNASUR. La Agenda se conforma por cinco grandes ejes de intervención, que abarcan asuntos generales como la protección social, la alimentación o la inclusión productiva. El documento enlista una variedad de acciones en cada uno de los ejes, aunque no llega a plantear metas ni indicadores. La UNASUR ha definido grupos de trabajo permanentes para cada uno de los ejes integrados por los países. Durante el 2016 UNASUR logró avanzar en la confección del marco de las Metas Sudamericanas, las cuales establecen diez grandes dimensiones de trabajo, con veinticuatro metas y cuarenta y siete indicadores de seguimiento. Se aprecia que varias de las dimensiones e indicadores contenidas han tomado en cuenta la estructura de los ODS y el PEAS.



El Consenso de Montevideo surge de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 2013. Es un esquema orientador de las políticas de población y desarrollo para la región latinoamericana, frente a los mandatos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de la ONU, realizado en 1994 en la ciudad de El Cairo[[10]](#footnote-10). El Consenso consta de un primer eje que establece orientaciones generales para la política de población y desarrollo, y otros ocho ejes referidos a grupos poblacionales específicos, con más de ciento veinte medidas priorizadas. Se destaca el tratamiento de: los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; el envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; la igualdad de género; la migración internacional y derechos de personas migrantes; el tratamiento de la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental; los pueblos indígenas, interculturalidad; afrodescendientes y combate a la discriminación racial. Cada país es responsable de implementar las recomendaciones del Consenso, de acuerdo con su propio marco jurídico y sus prioridades nacionales.



Finalmente, en el ámbito de Naciones Unidas, a partir de enero de 2016 comenzó a implementarse la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda sustituye a la de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015), con objetivos ampliados en el campo del desarrollo económico, social y ambiental de las personas. La nueva Agenda ofrece un marco de indicadores mundiales para el seguimiento de 17 Objetivos e identifica 229 indicadores de resultados. Esta matriz de indicadores ha sido seleccionada por un grupo de trabajo integrado por representantes de los institutos de estadísticas de los países. Los Estados miembros de ONU se comprometen a realizar un seguimiento y examen sistemático del cumplimiento de la Agenda 2030 en los planos nacional, regional y mundial. También a realizar un esfuerzo para apoyar el fortalecimiento de las capacidades estadísticas y de desarrollo institucional, en particular para con los países en desarrollo.



Para ejecutar las acciones que permitan la consecución de las metas fijadas en los ODS es necesario, en primer lugar, que los hacedores de políticas públicas sectoriales conozcan y comprendan alcance y metas de cada uno de los objetivos y, al mismo tiempo, que puedan contar con un rápido acceso a información estadística actualizada que permita caracterizar las diferentes realidades de nuestros países y territorios con la suficiente desagregación. Los gobiernos juegan un papel relevante no solamente en la recolección de información sino también en la definición analítica de los procesos que deberán ser llevados a cabo para convertir la información en acciones operativas que permitan alcanzar los resultados deseados. Un principio relevante de este plan consiste en “garantizar que nadie se quede atrás”, para lo cual es fundamental convocar la cooperación entre los países para promover el cumplimiento de los ODS en su totalidad; por lo que es urgente generar formas innovadoras de cooperación y asociación para desarrollar los esquemas de financiamiento oportunos, y que sean lo suficientemente inclusivos, como para garantizar un enfoque multiactor en la construcción de un desarrollo de carácter holístico.

En tal dirección, uno de los riesgos más grandes que enfrenta la implementación de las agendas del desarrollo, como la de los ODS, es el de la “evaporación política”. Según Dearden (2008: 188), la evaporación política ocurre cuando las buenas intenciones no logran plasmarse en acciones de política coherentes, operativas y concretas y permanecen en la simple retórica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recuerda que, para evitar esta evaporación política, es necesaria una mayor armonización internacional como así también el fortalecimiento de la coordinación para lograr una mayor coherencia en el ciclo de las políticas (Dearden, 2008: 190). Evitar la evaporación política requiere del establecimiento de un diálogo multinivel, que permita reflexionar y debatir, de forma moderna e innovadora, el papel de los procesos de integración regional en el diseño de políticas públicas regionales a favor del desarrollo sostenible y, por tanto, que contribuyan al cumplimiento de los ODS.

**4.- Los elementos de convergencia con el PEAS**

Si se analizan de manera comparativa los diversos instrumentos globales de promoción del desarrollo social, podemos ver que el PEAS muestra importantes elementos de convergencia. Evidentemente, estos reflejan consensos básicos aceptados a nivel mundial, que se materializan en los diversos instrumentos internacionales. Esos marcos identifican una serie de prioridades de intervención, marcando los horizontes hacia los cuales deberían orientarse los países participantes de esos acuerdos. El cuadro siguiente muestra los diversos puntos en común que guardan las agendas globales del desarrollo con el PEAS.



Fuente: Elaboración propia.

De la comparación con los diversos instrumentos vigentes para la promoción de Desarrollo Social regional podemos extraer diversas conclusiones. En primer lugar, podemos apreciar que el PEAS guarda una similitud importante con los ODS y las Metas Sociales de UNASUR, en términos de la coincidencia de ejes de intervención. También se aprecia una proximidad importante con el Protocolo de San Salvador, la Carta Social de la OEA y el Consenso de Montevideo.

Además, la estructura del PEAS ofrece cierta flexibilidad, que permite la incorporación de otras líneas de acción no consideradas. Por ejemplo, la Carta Social de OEA muestra un desarrollo interesante en su eje 2 de “Protección Social”, el cual es mucho más complejo que el enfoque que se recoge en el PEAS. La Carta de OEA también desarrolla un eje 6 sobre “Vivienda y Servicios Básicos”, el cual podría ser incorporado en el PEAS.

Por otro lado, el Protocolo de San Salvador de OEA recoge cierto énfasis en la perspectiva sobre el ciclo de vida y familia, en los ejes 10 “Derecho a la constitución y protección de la familia”, 11 “Derechos de la Niñez”, 12 “Protección de Ancianos” y 13 “Protección de Minusválidos”. Estos lineamientos de acción, que en algunos aspectos coinciden con el Consenso de Montevideo, podrían ser incorporados también en el PEAS.

En lo que respecta a UNASUR, las Metas Sudamericanas poseen un eje 8 de “Ciencia y Tecnología”, el cual marca, entre otras dimensiones, el de la democratización en el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación, el cual es un eje interesante para considerar por el PEAS. En términos de la Agenda Social UNASUR, la misma tiene un eje de acción 2 de “Promover sistemas de protección y promoción social……”, el cual es un desarrollo del cual carece el PEAS (ver también Carta Social OEA).

El documento del Consenso de Montevideo muestra que sus 9 temas de intervención coinciden con alguno de los 10 ejes del PEAS. El grado de coincidencias más altos con el PEAS se da en tres temas del Consenso relativos a las políticas para Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes, Igualdad de Género y Pueblos Afrodescendientes (temas B, E, I).

Los ODS, más allá de los diversos puntos de convergencia con el PEAS, muestran otros aspectos que podrían ser incorporados al Plan. Esto es así en cuanto al objetivo 7 “Garantizar acceso a la energía…”, el 9 “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva….”, y también el 11 “Lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, sostenibles. Desde una perspectiva cepalina, el ODS 9 podría ser incluido en el Eje VI del PEAS que busca “garantizar la integración productiva”[[11]](#footnote-11). El ODS 11 ofrece la oportunidad de fortalecer los esquemas de gobernanza estratégica que puedan diseñarse en cada uno de los territorios locales y de frontera. En este marco, el MERCOSUR puede contar con un socio estratégico clave como la red de Mercociudades o los espacios intra-bloque con representación de lo local. Sin lugar a duda, estos acuerdos interinstitucionales deberán contemplar las asimetrías que suelen caracterizar a las zonas de frontera y fortalecer las capacidades proyectuales, de gestión y rendición de cuentas de los gobiernos locales del MERCOSUR[[12]](#footnote-12).

En términos globales, los ODS son el instrumento que muestra el mayor grado de refinamiento técnico en cuanto a la formulación de sus metas e indicadores que han sido validados por todos los países. Las Metas UNASUR también presentan un desarrollo interesante en términos de metas e indicadores, y el Protocolo de San Salvador registra indicadores más amplios y abarcadores, que algunos consideran de difícil implementación.

En cuanto a los instrumentos de Evaluación y Seguimiento, se pueden identificar algunas variantes. Los instrumentos OEA se apoyan en los sistemas de Reportes Nacionales periódicos, en los que cada país es responsable de la elaboración de sus informes nacionales y elevarlos al ámbito técnico interamericano que hace su contraparte. Este proceso aparece claramente reglamentado en torno al Protocolo de San Salvador, el cual determina la periodicidad, amplitud y contenidos de los informes. Estos informes pueden generar recomendaciones de trabajo a los países.

En el caso de los ODS, el proceso no aparece todavía claramente reglamentado, aunque se estima que el mismo seguirá el proceso de los Objetivos del Milenio. En varios aspectos es muy similar al que se aplica en el ámbito OEA, con sistema de reportes nacionales periódicos. Las oficinas técnicas nacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tienen un rol activo como contraparte en este proceso. Estos informes tienen además un desarrollo cuantitativo y cualitativo muy importante, y sobre esta base se activa el sistema Naciones Unidad de Cooperación Técnica con los países. El sistema PNUD, además de su prolijidad metodológica, posee la enorme fortaleza de conectar y facilitar la asistencia técnica y los procesos de cooperación con otras agencias de desarrollo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tiene también un papel clave en materia de asistencia técnica a los gobiernos del subcontinente. En su seno, se constituyó el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe que tiene como objetivo coordinar el proceso de elaboración e implementación de los indicadores regionales y el desarrollo de capacidades en el marco del seguimiento de los ODS para la región. El Grupo, del que además participa la Conferencia de Estadística de las Américas (CEA), desarrolla sus actividades en concordancia con la labor del Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG) y con las actividades y decisiones del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (HLG-PCCB).

En síntesis, el PEAS demuestra un interesante grado de convergencia y flexibilidad para incorporar las diversas líneas de cooperación que se desprenden de las agendas globales del desarrollo y, al mismo tiempo, es un instrumento de planificación y coordinación ampliamente legitimado por los países del MERCOSUR.

5**.- Intersectorialidad**

La Agenda 2030 reafirma el interés en la colaboración intersectorial en su ODS 17 que busca Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, en donde se reafirma que “para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil”. En este mismo sentido, cabe también recordar el papel de los procesos de integración regional en el cumplimiento de los ODS. La Declaración final de las Naciones Unidas mediante la que se aprueba la Agenda 2030 reconoce “la importancia que para el desarrollo sostenible tienen las dimensiones regionales y subregionales, la integración económica regional y la interconectividad. Los marcos regionales y subregionales pueden hacer que sea más fácil traducir efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel nacional”.

La intersectorialidad requiere, por tanto, de una serie de arreglos estratégicos entre diferentes institucionales. De acuerdo con Rodrik (2004), “los arreglos institucionales pertinentes para el desarrollo de una política (…) necesitan cumplir con ciertas condiciones de éxito como el liderazgo político que acompañe el proceso multiactor propuesto y brinde decisiones de respaldo coherentes con el fortalecimiento de los sectores en estudio; también es necesario contar con transparencia y rendición de cuentas que reivindiquen la confianza de todos los actores (…) sobre los procesos y las estrategias en desarrollo, independientemente de su poder de negociación o tamaño en materia de gobernanza”. El concepto de intersectorialidad se define como la “intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector, en acciones destinadas, total o parcialmente, a tratar los problemas vinculados o conjuntos” (FLACSO, 2015).

El establecimiento de diálogos intersectoriales para una buena gobernanza incluyen: 1) la generación, acumulación y circulación de flujo de información y conocimiento que permiten procesos de sensibilización de los actores y la construcción de un lenguaje común; 2) la capacidad para introducir innovaciones sociales, institucionales y culturales; 3) la articulación intersectorial de estrategias, políticas y programas públicos con la participación de distintitas instituciones regionales; y 4) la implementación de políticas y programas creados interinstitucionalmente desde la fase de planificación hasta lograr un financiamiento conjunto. Por último, es necesario igualmente contemplar un mecanismo de “distribución de beneficios” a partir de la articulación de estructuras institucionales e instrumentos de financiamiento mediante los que se distribuyan los fondos y otros beneficios derivados de implementar las innovaciones (Lutrell y otros, 2012).

En el campo del MERCOSUR, es importante anotar que una institución como el PARLASUR ha destacado los instrumentos principales creados a lo largo de los últimos años para dar respuesta a los desafíos que plantea la implementación de los ODS 2030. Destacan en particular el papel del PEAS y el Estatuto de la Ciudadanía, documentos programáticos que en la mayoría de sus directrices coinciden plenamente con la Agenda de los ODS y se convierten en un verdadera Agenda del MERCOSUR para la implementación intersectorial de los ODS. Asimismo, en un plenario conjunto de la Comisiones de Trabajo y de Desarrollo Sustentable se aprobó “una Propuesta de Disposición en que el PARLASUR instruye a los Órganos decisorios y dependientes del MERCOSUR a informar el grado de implementación de la Agenda 2030 a nivel regional, nacional y local, así como instar a los Congresos Nacionales de los Estados Parte que incorporen en sus actividades legislativas los ejes de acción de los ODS” (Revista PARLASUR, 2017: 9).

**Conclusiones: el PEAS como instrumento coordinador de la Dimensión Social**

El PEAS en tanto instrumento de coordinación de las políticas vinculadas al desarrollo social, muestra un alto grado de coincidencia y alineamiento con diversos marcos de promoción del desarrollo global y regional. La estructura de diez ejes y 26 directrices del PEAS permite ordenar las acciones de diversos instrumentos internacionales. Esta es una fortaleza relevante, si consideramos la estrecha vinculación del PEAS con la importante institucionalidad política y técnica que el MERCOSUR cuenta en el campo de su Dimensión Social y su vinculación con la compleja gobernanza mundial.

La institucionalidad social del MERCOSUR ofrece diversas oportunidades para potenciar intersectorialmente la implementación de la agenda del desarrollo. Por ejemplo, estableciendo un mecanismo de rendición de cuentas periódica, a través de la CCMASM, con asistencia técnica en el seguimiento desde el ISM. Los formatos OEA de reportes nacionales anuales, los del ámbito SGT 10 de Trabajo de MERCOSUR con reportes anuales, o los informes nacionales voluntarios de los ODS 2030, son muy buenos ejemplos para considerar. Esos informes cualitativos aportan una riqueza de información muy relevante para los países atentos a la agenda del desarrollo.

Es importante avanzar en la vinculación activa de los planes de trabajo sectoriales del ámbito MERCOSUR (Reuniones de Educación, Trabajo, etc.) con el PEAS, articulándolos al proceso de rendición de cuentas permanente, asociados al cumplimiento de Objetivos e Indicadores PEAS actualizados. Para ello, instrumentos como el Sistema de Información del PEAS (SI-PEAS), creado por el ISM, establece un mecanismo sencillo para el reporte semestral de actividades de las reuniones del bloque que se vinculan al Plan[[13]](#footnote-13).

En la misma dirección, otro elemento facilitador en el seguimiento del PEAS y los ODS consiste en establecer una matriz de indicadores que permita realizar la evaluación y monitoreo de la ejecución estas agendas. En tal dirección, el ISM se encuentra implementando un Observatorio MERCOSUR de las Políticas Sociales (OMPS), que toma como base indicadores seleccionados de los ODS 2030 relacionados directamente al PEAS.

El uso del PEAS facilitaría el establecimiento de un marco homogéneo para la cooperación técnica dentro del bloque, a fin de establecer estrategias para el fortalecimiento mutuo de los países del MERCOSUR en las áreas de desarrollo social priorizadas por la CCMASM. Esto permitiría mejorar las sinergias con agencias del Sistema Naciones Unidas, entre otras agencias de promoción y financiamiento del desarrollo.

Es importante recordar que cada uno de los países del MERCOSUR tiene fortalezas diferenciadas en algún área del desarrollo social, las cuales pueden ser potenciadas y compartidas con el resto de los países socios. Esta es una forma adecuada para enfrentar el problema del “desarrollo en transición” a partir de la promoción e intercambio que ofrece el espacio regional para la cooperación Sur-Sur; ya que como se menciona en la Declaración Final de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (2011): “Esta modalidad de cooperar consolida las relaciones entre países de una misma región, promoviendo el desarrollo regional y la integración, así como la relación con otras regiones y la preservación de bienes públicos regionales y globales”.

Es necesario afirmar la conexión del Plan respecto a los órganos centrales de la política mercosuriana, como son el CMC y el GMC, pero también el PARLASUR en su rol de foro político del bloque. El PARLASUR ha tenido un papel importante en la difusión de los ODS, indicando los instrumentos regionales disponibles para su logro. Sobre este punto, el PARLASUR ha señalado que “*a pesar de los efectos de la crisis económica internacional y la disminución del comercio intrarregional, el MERCOSUR construyó en la última década una institucionalidad regional que debe ser considerada al momento de promover una alianza pública regional que permita colaborar en la agenda de los ODS. A modo de ejemplo, podemos citar el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) (…), la Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS) y el Instituto Social del MERCOSUR (ISM), además del propio Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR)*”. Asimismo, se reconocen los instrumentos jurídicos y políticos para el trabajo cotidiano y consecución de los ODS como “*el Acuerdo de Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social, la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, el Plan de Acción del Estatuto de la Ciudadanía y el Plan Estratégico de Acción Social, apenas para citar, son los más relevantes y que apuntan a profundizar y consolidar lo previsto en los ODS. El propio PEAS junto al Estatuto de la Ciudadanía son documentos programáticos que en la mayoría de sus directrices coinciden plenamente con la Agenda de los ODS, convirtiéndose en un verdadera Agenda del MERCOSUR para la implementación de los ODS”* (Revista PARLASUR, 2017: 8).

Existe un potencial importante de progreso al lograrse una mejor articulación intersectorial del PEAS con los diversos planes de trabajo existentes en materia de Educación, Salud y Trabajo, entre otros sectores clave. Asimismo, es necesario consolidar un ámbito de trabajo permanente, que vincule a las áreas de investigación social estatales (Ministerios), con los institutos nacionales de estadística, de cara a establecer un plan para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el cumplimiento de los Objetivos del PEAS (armonizados con los ODS). Por otro lado, este ámbito de colaboración reafirma el vínculo del Plan con las políticas públicas de los Estados parte, dinamizando el proceso de convergencia entre los desempeños de los países en las áreas de política social. Es decir, contribuye directamente a una convergencia general en términos del bloque y a una posible transferencia de políticas públicas con base en la identificación de buenas experiencias para su promoción e intercambio. En este aspecto, instrumentos que viene impulsando el ISM, como el Observatorio de Políticas Sociales, el Sistema de Información del PEAS y la Escuela de Políticas Sociales, pueden tener un importante papel.

Los festejos por los *40 años del Plan de Acción de Buenos Aires*, conocidos como PABAMA+40, marcan un hito histórico que pone en relevancia que la cooperación técnica para el desarrollo (CTPD) es un proceso multidimensional de alcance “bilateral o multilateral y su carácter, subregional, regional o interregional”. En este sentido, el Instituto Social del MERCOSUR reconoce y valora que la Conferencia de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, que tendrá lugar en Buenos Aires del 20 al 22 de marzo de 2019, brinda una oportunidad significativa para revisar lecciones aprendidas, identificar nuevas áreas y mecanismos donde la cooperación Sur-Sur y triangular puede agregar valor y tener mayor impacto, y comprometerse a un seguimiento adecuado y sistemático del progreso en las metas e indicadores de los ODS en el marco del sistema de las Naciones Unidas. La mayor parte de las actividades llevadas a cabo por los Departamentos de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales y de Investigación y Gestión de la Información pueden ser catalogadas dentro de las modalidades de cooperación Sur-Sur y triangular.

En conclusión, construir una verdadera gobernanza multidimensional, multinivel y multiactor es de vital importancia involucrar a los diversos poderes del Estado, y a éste en todos sus niveles (administraciones subnacionales) y a la sociedad civil en su conjunto para “garantizar que nadie se quede afuera del desarrollo” así como consolidar las prácticas de la cooperación técnica entre países en condiciones similares de desarrollo. En esa tarea, el MERCOSUR está en condiciones de realizar un aporte sustantivo a la construcción de una *red densa de cooperación*, que permita afirmar una *descolonización* de los procesos de la cooperación global para el desarrollo.

**Bibliografía**

Fuentes primarias:

MERCOSUR (2011). *Plan Estratégico de Acción Social.* Asunción, Instituto Social del MERCOSUR (ISM).

OEA (2005). AG/RES 2074: Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el Protocolo de San Salvador.

OEA (2012). Carta Social de las Américas. Aprobada 4 de junio de 2012.

OEA (2015a). Plan de Acción de la Carta Social de las Américas. Aprobado 11 de febrero de 2015.

OEA (2015b). Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador. Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador.

ONU (2015). Report of the Inter-Agency and Expert Group on sustainable Development Goal Indicators. Diciembre de 2015.

ONU (2016). Sustainable Development Solutions Network. Preliminary Sustainable Development Goal Index and Dashboard. Febrero de 2016.

ONU (2016). The Sustainable Development Goals Report 2016.

ONU (2016). Progresos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe del Secretario General. Junio de 2016.

UNASUR (2012a). Agenda de Acciones Sociales Prioritarias. Decisión UNASUR Nro. 9/2012.

UNASUR (2012b). Agenda de Acciones Sociales Prioritarias. Decisión UNASUR Nro. 28/2012.

UNASUR (2016). Metas Sociales Suramericanas: hoja de ruta para su formulación. Consejo Suramericano de Desarrollo Social.

Fuentes secundarias:

Aguilar Villanueva, L. F. (2006). *Gobernanza y gestión pública*. México, Fondo de Cultura Económica (FCE).

Alonso, J. A. (2006). “América Latina: las trampas del progreso”. En: Freres, C. y J. A. Sanahuja, (coords*.) América Latina y la Unión Europea. Estrategias para una asociación necesaria.* Barcelona, ICARIA.

Bárcena, A. (2015). “La descolonización de la agenda para el desarrollo después de 2015: hacia una asociación universal para el desarrollo”. En: Ocampo (Edit.) *Gobernanza global y desarrollo. Nuevos desafíos y prioridades de la cooperación internacional*. Santiago de Chile, Siglo XXI Editores.

Caetano, G. (Coord.) (2011). *MERCOSUR 20 años*. Montevideo, CEFIR.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2002). *Globalización y Desarrollo.* 29 período de sesiones, Brasilia, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018). *Nuevos desafíos y paradigmas. Perspectivas sobre la cooperación internacional para el desarrollo en transición*. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Dearden, S. (2008). “Policy arena. Introduction: European Union development aid policy – the challenge of implementation”, *Journal of International Development,* Vol. 20, N° 2.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (2015), *Informe Técnico para el Diseño de Plan de Trabajo para reorientación de Programas de Salud Públi*ca. Santiago de Chile, FLACSO.

Inge Kaul y Donald Blondin (2015) Los bienes públicos globales y las Naciones Unidas.

Jenks, B. (2015) Cooperación para el desarrollo de las Naciones Unidas: las raíces de una agenda de reforma. En: Ocampo (Edit.) *Gobernanza global y desarrollo. Nuevos desafíos y prioridades de la cooperación internacional.* Santiago de Chile, Siglo XXI Editores.

Luttrell, Cecilia, Lasse Loft, Maria Fernanda Gebara y Demetrius Kwerka (2012). “Who should benefit and why? Discourses on REDD+ benefit sharing”, Arild Angelsen y otros (eds.), *Analysing REDD+ Challenges and choices*. Yakarta, CIFOR.

Maldonado Valera Carlos F. (2015). “La construcción de pactos sociales para la protección social”. En: Cecchini, S. et al (Edit.) *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Nuria Cunill-Grau, Fabián Repetto, Carla Bronzo (2015). “Coordinación intersectorial pro integralidad de las instituciones de protección social”. En: Cecchini, S. et al (Edit.) *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización.* Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Ocampo, J.O. (2015). “Gobernanza global y desarrollo: una comprensión cabal de las instituciones y las prioridades”. En: Ocampo (Edit.) *Gobernanza global y desarrollo. Nuevos desafíos y prioridades de la cooperación internacional.* Santiago de Chile, Siglo XXI Editores.

Ocampo, J. O. (2015). “La gobernanza económica y social y el sistema de las Naciones Unidas”. En: Ocampo, J. (Edit.) *Gobernanza global y desarrollo. Nuevos desafíos y prioridades de la cooperación internacional.* Santiago de Chile, Siglo XXI Editores.

Oddone, N. (2018). “Cadenas regionales de valor: una oportunidad para la intersectorialidad en la Región SICA”. En: Reyes Ruiz, M. (ed.), *Gobernanza e integración regional.* Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California (UABC) (en imprenta).

Oddone, N. y Rodriguez Vázquez, H. (2016). “Cooperación Triangular: Perpectivas latinoamericano-caribeñas”. En: Velázquez, R., Ponce, E. y Lucatello, S. (coord.), *Teoría y práctica de la cooperación internacional para el desarrollo: Una perspectiva desde México*. Ciudad de México, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo and Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo. pp. 171-182.

Oddone, N. y Martín, P. (2014) “El caleidoscopio de la Cooperación Sur-Sur en la Argentina: ¿muchos prismas con un mismo objetivo?”. En: Ayala Martínez, C. y Riviera de la Rosa, J. (coord*.). De la diversidad a la consonancia: La Cooperación Sur-Sur Latinoamericana, Volumen II: Estudios de país, esquemas bilaterales y triangulares.* Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas. pp. 79-113.

Padilla, R. y Alvarado, J. (2014). “El resurgimiento de la política industrial”. En: Padilla, R. (ed.), *Fortalecimiento de las cadenas de valor como instrumento de la Política Industrial*. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Peres, W. y Primi, A. (2009). “Theory and practice of industrial policy: evidence from the Latin American experience”, *Serie Desarrollo Productivo*, Nº 187. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Revista PARLASUR (2017). *Los objetivos de desarrollo sostenible.* Montevideo, PARLASUR.

Secretaría General Iberoamericana (2011). *Declaración Final de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno*. Madrid, SEGIB.

Setaro, M. (2016). “Políticas Públicas regionales: el rol del Instituto Social del MERCOSUR”. En: García, M.C., y Setaro, M. (Coord.), *Democracia y Políticas Públicas. El rol de la investigación en el ciclo de políticas sociales*. Asunción, Instituto Social del MERCOSUR (ISM).

1. Sobre el fenómeno de la Globalización y las respuestas posibles desde América Latina, mantiene vigencia el informe de CEPAL (2002). [↑](#footnote-ref-1)
2. Según Jenks (2015: 219) durante la década de los 90 emergió un enfoque conocido como el de la “era de los objetivos”, dando lugar a la creación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), antecedente directo de los ODS 2030. [↑](#footnote-ref-2)
3. Serán tratados en la sección 4, instrumentos tales como la Carta Social de la OEA o la Declaración de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre otros. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vale recordar que el Plan de Acción de Buenos Aires (1978) sobre la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) estableció las primeras orientaciones sobre el concepto de cooperación triangular. La Recomendación 35 de ese Plan establecía que: “los países desarrollados y sus instituciones deben dar su pleno apoyo a las iniciativas de CTPD, entre otras cosas: a) aumentando sus aportaciones voluntarias a los programas operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, a fin de que se pueda dedicar un porcentaje mayor de los fondos de la cooperación técnica multilateral al respaldo de la CTPD; b) prestando apoyo financiero, con carácter voluntario, a la cooperación técnica entre dos o más países en desarrollo y a instituciones de los países en desarrollo que tengan potencial para la CTPD”. Para 1980, el concepto de cooperación triangular se establece de manera explícita en el célebre “Informe Brandt”. [↑](#footnote-ref-4)
5. Además de los órganos políticos directivos y los organismos de asesoramiento técnico de la estructura MERCOSUR, también existen ámbitos que dan lugar a la participación y expresión política y social del bloque. Estos son las Cumbres Sociales, que reúnen a representantes de la sociedad civil organizada regional, así como el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) que es un ámbito que reúne a los representantes electos de los países. Ambos mecanismos contribuyen a consolidar un ejercicio de ciudadanía regional más efectivo. [↑](#footnote-ref-5)
6. En ISM (2018: 27-121) hay una descripción ajustada de los principales ámbitos que componen la dimensión social del MERCOSUR y que participan del PEAS. [↑](#footnote-ref-6)
7. Además del mecanismo de reportes nacionales, con rendiciones de cuentas y propuestas de mejora, el instrumento contempla el instituto de la “petición individual” para el amparo frente a presuntas violaciones a los derechos de libertad sindical y educación. [↑](#footnote-ref-7)
8. Solo se presentan los indicadores de resultado, para mayor información sobre los indicadores de estructura y de proceso puede visitarse: <http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/indicadores.asp> [↑](#footnote-ref-8)
9. Por la importancia que este instrumento tiene para el trabajo desarrollado por el Instituto Social del MERCOSUR (ISM), este será analizado con mayor profundidad en la siguiente sección. [↑](#footnote-ref-9)
10. La Conferencia de El Cairo (1994) hizo hincapié en la relación integral entre la población y el desarrollo y buscó responder a las necesidades de los individuos en lugar de lograr sólo metas demográficas. La adopción de su Programa marcó una nueva concepción sobre cómo integrar efectivamente los temas de población en las propuestas de desarrollo socioeconómico. [↑](#footnote-ref-10)
11. El ODS 9 marca la evolución del concepto de política industrial en la medida que su objetivo y alcance se han ido ampliando a lo largo de los últimos años. “En términos generales, la política industrial se refiere a la intervención del Estado en la industria para organizar y modificar la estructura y los esquemas de producción” (Padilla y Alvarado, 2014: 15). Pero actualmente, la política industrial no se restringe solo a las medidas dirigidas al sector secundario de la economía, pues abarca también aquellas que apuntan al desarrollo de actividades primarias y servicios. Es por lo que también se usa el concepto de política industrial inclusiva como sinónimo de política de desarrollo productivo. Su impacto depende de la capacidad de diseño, aplicación y evaluación de los formuladores de políticas públicas y del alcance de los instrumentos utilizados para cumplir el objetivo propuesto (Peres y Primi, 2009; Padilla y Alvarado, 2014). [↑](#footnote-ref-11)
12. El estudio del ISM (2018) “Ciudadanía en Zonas de Frontera”, aborda en profundidad está cuestión. [↑](#footnote-ref-12)
13. Los organismos vinculados a la dimensión social del MERCOSUR y el SI-PEAS está disponible en: http://peas.ismercosur.org/es/portada/ [↑](#footnote-ref-13)